ISSN: 2773-7349

Sociedad & Tecnología

Revista del Instituto Tecnológico Superior Jubones

2021

Volumen / 4

Número / S2

Noviembre

La Vulnerabilidad. Su enfoque desde el Derecho Privado

Vulnerability. His approach from Private Law

Mario Holger Abad Tandazo

E-mail: Ab.marioabadt@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8248-7489>

Investigador independiente. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Abad-Tandazo, M. H. (2021). La Vulnerabilidad. Su enfoque desde el Derecho Privado. *Revista Sociedad & Tecnología*, 4(S2), 638-653.

RESUMEN

Si se desea alcanzar la igualdad de las personas vulnerables se deberá redefinir el término, y entonces, vulnerable no será pertenecer a una categoría (discapacitado, menor de edad, indígena, mujeres, etc.), sino una consideración que invita a promover las propias potencialidades con el fin de superarse e integrarse al entorno, lo que conlleva a una reflexión normativa fundamental en tal sentido. Este trabajo tiene como objetivo general determinar el enfoque de la Vulnerabilidad como categoría referente al ser humano, en el Derecho Privado; para lo cual se desarrolló un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, sistematizado a través de los métodos exegético, analítico-sintético, histórico-lógico y revisión bibliográfica. Se concluye que se impone un cambio de paradigma en la consideración jurídica de los temas involucrados con la vulnerabilidad del ser humano, lo que implica reconocer en el individuo su aptitud para trazar y llevar a cabo su proyecto de vida, entonces la desventaja que causa la vulnerabilidad estará unida a la desigualdad que ésta genera para la concreción de ese proyecto vital, por tanto, exige mayor atención. Se trata de

empoderar al vulnerable mediante la gestión para fortalecer la resiliencia.

Palabras Clave:

Derecho Internacional, vulnerabilidad, Derecho Privado

ABSTRACT

If you want to achieve equality for vulnerable people, the term must be redefined, and then, vulnerable will not be belonging to a category (disabled, minor, indigenous, women, etc.), but a consideration that invites you to promote your own potentialities in order to overcome and integrate into the environment, which leads to a fundamental normative reflection in this regard. The general objective of this work is to determine the focus of Vulnerability as a category referring to the human being, in Private Law; For which a descriptive study with a qualitative approach was developed, systematized through exegetical, analytical-synthetic, historical-logical methods and bibliographic review. It is concluded that a paradigm shift is imposed in the legal consideration of the issues involved with the vulnerability of the human being, which implies recognizing in

the individual his aptitude to trace and carry out his life project, then the disadvantage caused by the Vulnerability will be linked to the inequality that it generates for the realization of this vital project, therefore, it demands greater attention. It is about empowering the vulnerable through management to strengthen resilience.

Keywords:

International Law, Vulnerability, Private Law

INTRODUCCIÓN

Con el extraordinario aporte del Derecho internacional al reconocimiento y salvaguarda de los Derechos Humanos, la consideración jurídica de la vulnerabilidad se erige en estos tiempos en una inevitable realidad que consagra al paradigma protector hacia los más débiles o vulnerables.

Entre estos grupos vulnerables, reconocidos por el Estado ecuatoriano, que requieren de una atención prioritaria están los menores de edad que cuentan en el marco normativo ecuatoriano con un sistema nacional de protección integral, bajo el principio del Interés Superior del Niño.

De igual forma, se incluyen las personas de la tercera edad y jubilados, para los cuales la norma estipula el acceso a salud y servicios, así como rebajas de tributos en la búsqueda de proveerles una vida digna de bienestar físico y psicológico, y adecuados estándares económicos. En este sentido, se han dispuesto protocolos de atención para evitar el abuso físico, psicológico, económico y el actuar negligente y abandono hacia ese sector de la población.

También dentro los grupos vulnerables se encuentran las personas con algún tipo de discapacidad física, mental, intelectual o sensorial limitados permanentemente de las capacidades biológicas, psicológicas y asociativas para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria

(Decreto Ejecutivo, 2017). Estas personas requieren principalmente de atención especializada en salud, educación especializada y privilegios tributarios.

Otro de estos grupos lo constituyen las mujeres embarazadas, quienes necesitan de protección en los ámbitos de salud y trabajo. De igual forma, son reconocidos como vulnerables los migrantes, que precisan del respecto a su derecho a la movilidad humana.

Además, están las personas que padecen de una enfermedad catastrófica, crónica y con riesgo para la vida, que requieren de tratamientos prolongados o permanentes y costosos (Ministerio de Salud Pública, 2012), estos demandan de una atención especializada, preferente y oportuna.

Sin embargo, no basta con el reconocimiento de la condición de vulnerabilidad y los derechos de estos grupos de personas desde el marco normativo, se necesita de voluntad política e implementación de estrategias orientadas a su cumplimiento; sobre este particular se han realizado diversos estudios entre ellos los de Bustos (1996), Scalabrini (2009), Schötz (2013),

Barranco y Churrua (2014) y Medina (2017), quienes desde diversas perspectivas aportan referentes para el presente estudio.

En este contexto se inscribe esta investigación que tiene por objetivo determinar el enfoque de la vulnerabilidad como categoría referente al ser humano, en el Derecho Privado.

Para el tratamiento de la vulnerabilidad dentro del Derecho Privado se han estructurado en el desarrollo del presente trabajo los siguientes epígrafes: 1) concepto de vulnerabilidad; 2) la vulnerabilidad en el Derecho Privado; 3) la tutela de la vulnerabilidad como principio del Derecho Privado; 4) incidencias del principio de tutela de la vulnerabilidad en el derecho privado; 5) el derecho civil y los vulnerables; 6) la libertad como derecho humano desde el Derecho Privado; 7) la privación de libertad y sus efectos en la

vulnerabilidad de los privados de libertad; y 8) la vulnerabilidad de los privados de libertad.

METODOLOGÍA

El proceso investigativo se fundamenta en un estudio de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, sistematizado a través de los métodos exegético, analítico-sintético, histórico-lógico y revisión bibliográfica.

Los métodos exegético y analítico-sintético facilitaron el examen, interpretación, cotejo u resumen de las normativas relativas a los grupos vulnerables y sus derechos; a través del histórico-lógico se analizó la evolución en el tiempo del objeto de estudio.

Por otro lado, la revisión bibliográfica permitió la consulta a tesis, artículos científicos, libros y otros materiales bibliográficos para la fundamentación teórica de este trabajo (Espinoza, 2020). Estos materiales fueron recuperados de diversas bases de datos nacionales e internacionales especializadas en el tema.

DESARROLLO

Antes de cualquier análisis relativo al tratamiento en el Derecho Privado a la vulneración de los derechos de las personas se impone un acercamiento a la noción de vulnerabilidad.

1. Concepto de Vulnerabilidad

La vulnerabilidad es una situación fáctica de inferioridad o desventaja que padecen ciertas personas por razones inherentes a su identidad o condición, esta condición es sustento para justificar un tratamiento diferenciado que se encauce a una protección específica, de manera tal, que la vulnerabilidad alude al mayor grado de susceptibilidad a sufrir daños, de allí que podamos definir a la vulnerabilidad como equivalente a debilidad social y a debilidad jurídica.

El catedrático Luis Alberto Valente define a la vulnerabilidad en estos términos:

“quienes se encuentran en un estado o circunstancia desfavorable, o que padecen desventajas, carencias, o se encuentran bajo circunstancias que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, en fin, se alude a circunstancias que obstan a la satisfacción de sus necesidades específicas” (Valente, 2015).

El término “vulnerabilidad”, revela la susceptibilidad del individuo o conglomerados sociales por su condición relativa en la sociedad, a ser dañado, herido, o en cierta manera afectado de forma física o moral, de allí la necesidad de defenderse y hacer respetar sus derechos, entre estos grupos de individuos, como ya señalamos en la introducción, se encuentran: menores, individuos con trastornos cognitivos, nivel socioeconómico muy bajo, presos, refugiados, desplazados, mujeres embarazadas y personas en situaciones asimétricas en general.

No cabe dudas en cuanto a los conceptos abordados dejan ampliamente la punibilidad de su análisis y sobre ello, se impone entonces, examinar también las limitantes existentes a dicho concepto:

a). – “Definiciones demasiado amplias, Casi toda la humanidad estaría comprendida en ellas en donde todas las guías sugieren “darle especial atención” a la investigación donde grupos vulnerables están incluidos.

b). - Las definiciones son grupales, la vulnerabilidad del sujeto puede depender, no solo de sus condiciones, sino de las características del estudio que comprende, escrutinio especial, tipo de estudio, riesgo entre otras” (Levine, 2004, p. 395).

2. La Vulnerabilidad en el Derecho Privado

La vulnerabilidad en ciencias aplicadas es definida como una medida de características como la, sensibilidad y de las circunstancias la exposición, de una persona o de un grupo a una amenaza, incluido el grado de recuperación del impacto producido por el hecho dañoso.

La vulnerabilidad así definida depende del conjunto de los elementos que derivan de la situación o la condición de una persona o de un grupo. El término vulnerabilidad es siempre relativo y específico con respecto a una amenaza particular subyacente. Las ciencias aplicadas han coincidido históricamente en afirmar que solo es posible hablar de un grado de vulnerabilidad desde el punto de vista de la probabilidad de la amenaza y en función de su intensidad particular, de su frecuencia y de su duración (Estupiñán, 2013, p. 193).

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos también podemos encontrar fundamentos de este principio; así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH, 2012) ha sostenido que “toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos”; y que “no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”

Como dice (Estupiñán, 2013), En el campo del soft law se destacan las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”. Dicho documento caracteriza como condición de vulnerabilidad a aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Señala como causas de vulnerabilidad, entre otras: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el

desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.

De la misma manera el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, establece:

“sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce como supuestos de vulnerabilidad la edad o estado de salud, los recursos, condición social o cultura, la falta de igualdad de oportunidades, las limitaciones para satisfacer ciertas necesidades, la desnutrición y enfermedad, la falta de acceso a los servicios públicos, la marginación”.

Sin perjuicio de desarrollos venideros, por lo pronto, con el término vulnerabilidad se designa a quienes se encuentran en un estado o circunstancia desfavorable, o que padecen desventajas, carencias, o se encuentran bajo condiciones que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, en fin, se alude a condiciones que obstan a la satisfacción de sus necesidades específicas. Por lo pronto y aunque por diferentes causas la vulnerabilidad (en sentido amplio) es un concepto que nos comprende a todos (nadie escapa a esa situación), el análisis jurídico deberá ponderar la capacidad de respuesta ante la causa generadora de esa desigualdad. A su vez, esa vieja idea, según la cual al ocuparse del individuo el derecho civil atiende sólo a las personas avasalladas en su personalidad fue cediendo paso, y hoy la idea es pensar al sujeto desde una posición de desventaja, sea por pertenecer a un grupo de personas que padecen un interés homogéneo, o bien por hallarse en una situación de inferioridad que impide el goce de sus derechos.

Mención especial a la Convención de los Derechos del Niño o los que eliminan toda forma de Discriminación, merecen en la especie aquellas Convenciones que han repercutido decididamente sobre el derecho interno, como, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad aprobado por Naciones Unidas en el año 2006.

De los pueblos indígenas

A raíz del proceso de exclusión vivido por los pueblos indígenas a lo largo de la historia, desde mediados del siglo XX la comunidad internacional comenzó una etapa de consideración hacia aquellos, y sin perjuicio de otros documentos emanados de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

De manera consecuente, los artículos 56 y 57 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 (CRE), destacan que las comunidades indígenas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, además a ser consultados y participar en los beneficios de los proyectos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

De los discapacitados

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad significó un aporte decisivo en la materia al establecer principios como el respeto a la dignidad del discapacitado y de su autonomía individual, no discriminación, igualdad de oportunidades y respeto por las diferencias, accesibilidad, toma de conciencia de la sociedad fomentando actitudes receptivas y promoviendo la concientización social respecto de quien sufre o padece esta problemática.

La mujer

En torno a la problemática de mayor vigencia en la actualidad sobre la supuesto violencia de género, aunque poseemos un concepto distinto pues entendemos que la violencia no está en el género de las personas, sino, en su formación como ser humano y social, no obstante visto desde múltiples aristas es un problema innegable, superando la estrechez de la mirada sólo enfocada en el proceso penal, la Convención Interamericana garantiza todos los derechos reconocidos y la

eliminación de todas las formas de discriminación, además de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

No cabe dudas sobre que, el derecho civil de la igualdad no puede omitir, o establecer un trato o una consideración diferenciada a quienes son merecedoras de una mirada protectora, empoderando a quien padece la desventaja, fortaleciendo sus aptitudes y evitando su marginación, sin embargo, podemos estar frente a una desventaja socio estructural que ocasiona la desigualdad y de allí la necesaria protección jurídica.

Tercera edad

Se ha sostenido que la discusión acerca de la titularidad de derechos en la edad avanzada se inserta en un contexto más amplio de debate académico, y que, a su vez, responde a un movimiento filosófico que entiende de gran valor la atribución de derechos a determinados grupos. "En el caso de las personas mayores son titulares de derechos individuales, pero también lo son de derechos de grupo" (Guzmán, 2005, p. 32).

Luego de insistir en que la edad es un motivo explícito y simbólico de discriminación que afecta el ejercicio de todos los derechos humanos en la vejez, se destaca entre otras ideas, la necesidad de reforzar la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.

3. La Tutela de la Vulnerabilidad como Principio del Derecho Privado

Es de intentar en este punto, delinear algunas reflexiones en torno a que visibilizarían el principio de tutela de la vulnerabilidad como principio general del Derecho, sin perjuicio de su aplicación a otras ramas o campos del Derecho, como el Derecho del Trabajo, el Derecho Penal, el Derecho Administrativo, el Derecho Tributario, el Derecho Internacional, entre otro, centraremos nuestro análisis en el Derecho Privado.

En esta perspectiva es que se ubica al principio de la tutela de la vulnerabilidad,

como heredero de la tradición protectora del favor *debilis* enriquecida con la constitucionalización del Derecho Privado y el peso retórico del discurso de los derechos humanos, en relación con los principios entendiéndolos como enunciados trascendentes, inmutables y universales, preferimos, una mirada dinámica que refleja lo que una sociedad en un tiempo y lugar determinado decide preservar y promover.

Cuando se hace referencia al principio de tutela de vulnerabilidad, *pro consiguiente*, se entiende que “comprende la expansión en el campo de los derechos humanos, la necesidad de los operadores jurídicos de percibir, proteger, atender las particularidades, flexibilizar y realizar los ajustes necesarios para el goce pleno y efectivos de los derechos y del principio *pro homine*” (Pinto, 2017, p. 43).

Si se piensa en la inserción de la vulnerabilidad como principio en el Derecho Privado, resulta necesario analizar el recorrido que ha atravesado de hecho, como la primera generación del Derecho Privado moderno aquella emergió tras los procesos de codificación muy favorable tanto en lo político como en lo económico a la Revolución Francesa. El primer referente de este proceso fue el Código Civil francés de 1804, que se erigió como modelo de la tradición del derecho continental europeo, influyendo en la cultura jurídica de países de América, Asia y África que fueron antiguas colonias de esos países.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 buscaba fundamentalmente garantizar ciertas libertades individuales, libertad de pensamiento, religión, comercio, propiedad, etc. Se buscaba así un Estado abstencionista que no interfiere en el ejercicio de los derechos y libertades individuales.

El artículo 1 de dicha declaración establecía que:

“los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Se perfilaba así la igualdad de las personas humanas en las relaciones

jurídicas en un sentido formal, esto es, en la ley, *pro la ley* y ante la ley. En ese contexto en materia interpretativa emergía el principio *favor debitoris*, ante supuestos de vaguedad, oscuridad o ambigüedad” (Calvo, 2013, p. 4).

Este paradigma ideológico clásico sobre el que se edificó el concepto de orden público entró en crisis con el desarrollo de la Revolución Industrial. Dicho proceso produjo importantes transformaciones económicas, sociales, culturales, políticas y tecnológicas que impactaron fuertemente en las sociedades de occidente, consolidando el modo de producción capitalista. Frente a dichas transformaciones y con motivo de las problemáticas emergentes de dicho proceso histórico, trabajo asalariado, sin regulación muchas veces en condiciones insalubres, éxodo de poblaciones rurales a grandes núcleos urbanos, concentración de la riqueza, consolidación de nuevas clases sociales: la burguesía industrial, el proletariado, entre otras, surgieron en campo filosófico y político dos núcleos de pensamiento que, con sus diferencias, criticaron al liberalismo político y económico, y sus consecuencias, promoviendo los valores de la igualdad y la justicia social, entendido ya en términos formales, es decir, que todos los hombres son libres en derechos y en dignidad, sino atacando a las desigualdades fáctica y promoviendo la igualdad real.

Por un lado, las ideas socialistas, el comunismo, el trotskismo, la socialdemocracia, etc., y la doctrina social de la Iglesia Católica, a partir de la encíclica *Rerum Novarum* del Papa León XIII en el año 1891, comienzan a expresar su preocupación por las graves desigualdades sociales y económicas.

Se puede reconocer una “tercera generación” del Derecho Privado, que se inserta en el debate ideológico contemporáneo bajo el paradigma de los derechos humanos y por otro lado, diferentes movimientos de los que podríamos llamar la “posmodernidad”, en la que destacan nuevas cosmovisiones

filosóficas y políticas visibilizado nuevas vulnerabilidades: los usuarios y consumidores, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y/o padecimientos mentales, los pueblos y comunidades indígenas, la diversidad sexual, movimientos feministas, ecologistas, pacifistas, consumeristas, indigenistas, entre muchísimas otras” (Lyotard, 1987, p. 24).

4. Incidencias del principio de tutela de la vulnerabilidad en el Derecho Privado

En función de lo expuesto en acápites anteriores, puede comprenderse que se encuentra presente el principio de tutela de la vulnerabilidad con carácter fundante e informador o que resulta aplicable a la hora de la interpretación y aplicación de las siguientes normas:

- a) En materia de relaciones de familia,
- b) Respecto de la interpretación de actos discriminatorios,
- c) En las relaciones jurídicas en las que estén presentes niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad o personas pertenecientes a pueblos indígenas;
- d) En relación a la incidencia de riesgos ambientales;
- e) En lo relativo a la salud mental, la salud sexual y reproductiva y otras enfermedades con legislación específica (VIH, alcoholismo, adicciones, trastornos alimentarios, celiacía, etc.)
- f) En lo relativo a la protección jurídica de los consumidores, en la protección en materia de regulación contractual, de la responsabilidad por daños a consumidores y en el ejercicio del poder de policía estatal y la implementación de políticas públicas de promoción de derechos, educación e información a los consumidores, en especial en el caso de los consumidores hipervulnerables;

g) En la contratación inter empresaria, en la regulación de los contratos de adhesión, contratos lesivos, en las operaciones de comercio electrónico y aun de los contratos paritarios en los que exista vulneración a la buena fe, al orden público, ejercicios abusivos de derechos o situaciones jurídicas abusivas.

h) En la materia de Derecho de Daños respecto de la aplicación de la función preventiva y concordante y la aplicación de los daños punitivos.

Al pensar las consecuencias de reconocer la existencia de un principio general de tutela de la vulnerabilidad, más allá de su despliegue ontológico, entendemos que ello implica una interesante efectividad práctica, que intentamos delinear de la siguiente manera:

“a) Resulta un presupuesto necesario para la interpretación y aplicación del Derecho efectuar un “test de vulnerabilidad”, a efectos de evaluar el marco normativo aplicable a dicha relación o situación jurídica.

b) Al detectar la existencia de situaciones de vulnerabilidad la normativa específica aplicable a dicha relación deberá conjugarse en “diálogo de fuentes” con las normas principios e instituciones que rigen dicha situación o población vulnerable.

c) En supuestos donde la norma no es explícita, la presencia de personas en situación de vulnerabilidad en la regulación normativa nos permite inferir su carácter de orden público, y por consiguiente, su imperatividad, por lo que las partes del acto jurídico no podrán renunciar o disponer de su contenido, las autoridades administrativas y judiciales podrán invocarlas y aplicarlas de oficio y su contravención traerá aparejada la ineficacia del negocio y la inaplicabilidad del derecho extranjero que lo contravenga.

d) En su función hermenéutica, entendemos que el principio puede

jugar como regla de cierre ante supuestos de vaguedad, ambigüedad u oscuridad en la interpretación de la ley, de los actos jurídicos, de la prueba o la legitimación procesal, privilegiando la interpretación más favorable a las personas en situación de vulnerabilidad.

e) En su función jurígena, el principio cumple una función limitativa de la autonomía privada, perfilando en su vinculación con el principio de buena fe de deberes de conducta, positivos y negativos, que atienda a la situación de las personas en situación de vulnerabilidad en las relaciones jurídicas concretas, de manera flexible, dinámica y fluida.

f) En su función integradora, el principio desempeña una función fundante e informadora, ofreciendo valores para fundamentar internamente el ordenamiento y dar lugar a creaciones pretorianas ante silencios del legislador.

g) En su función orientadora de los poderes públicos, el principio fundamenta la legitimidad de actuación del Estado en el diseño e implementación de políticas públicas en la materia, y como destinatarios prioritarios de las mismas, así como el ejercicio del poder de policía, en sus fases de regulación, fiscalización y sanción.

h) En materia de acceso a la justicia, la tutela de la vulnerabilidad requiere de estrategias específicas y atenciones y mecanismos adecuados en función de las personas en situación de vulnerabilidad" (CSJNA, 1947)¹.

En este contexto, debe tenerse presente que ante situaciones que traen aparejadas una colisión de derechos se debe verificar

que la restricción que prevalezca sea la más restringida o, la que afecte a un derecho de menor jerarquía, de modo que como sostiene la CIDH, "entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido, es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo" (Pinto, 2004, p. 32).

5. El Derecho Civil y los Vulnerables

De manera general Hobbes (1987) cuestionó el marco conceptual en el que anteriormente había sido pensada la *societas civilis*, aun cuando conserva su definición nominal recibida. Ese cuestionamiento resulta de la adopción de premisas rigurosamente individualistas que arruinan los postulados del derecho natural clásico, el carácter natural de la comunidad política y la sociabilidad natural y referente a este punto ha sido seguido con mayor y menor rigor por todos los teóricos modernos del derecho natural, hace del individuo el presupuesto, el único, para decirlo con rigor del orden jurídico y político; dicho individuo es concebido como una entidad dotada por naturaleza de determinadas propiedades generadoras de derechos subjetivos.

Esta inversión de la subordinación tradicional del individuo a la comunidad política la cual tenía un sentido evidentemente normativo supone una mutación epistemológica y acarrea dos consecuencias mayores que, respectivamente, conciernen a la concepción de la sociedad civil y a la del derecho.

Con el extraordinario aporte del derecho internacional de los derechos humanos, la consideración jurídica de la vulnerabilidad se erige en otra realidad, pues el Derecho

¹ La calificación de una norma como de orden público puede ser extrapositiva. Así, el contenido de orden público puede estar implícito y ser el intérprete quien lo merita teniendo en cuenta los principios e ideas superiores imperantes en la sociedad, en ese tiempo. La calificación será, pues, de la jurisprudencia. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, al señalar que el orden público no surge exclusivamente de la calificación que hacen las propias leyes, "...sino de la naturaleza, en razón de las causas que determinaron su sanción y los fines que se han procurado obtener con ellas" (CSJNA, 19/9/1947).

Internacional, consagra al paradigma protectorio hacia los más débiles erigiendo como principio rector, una verdadera ética de los vulnerables. Sin embargo, si se quiere alcanzar la igualdad real que se pregona deberá partirse por redefinir el término, y entonces, vulnerable no se es por pertenecer sólo a una categoría, sino que es una consideración que invita a promover las propias potencialidades e integrarse al entorno.

De lo anterior se deduce que existen grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad y sometidos por ende a una consideración especial. Entre las directivas que en materia de derechos individuales hallan feliz recepción en el nuevo articulado hay algunas que se imponen ante la sagaz mirada del operador jurídico. Tal es lo que ocurre con aquellas que responden al principio de autonomía, igualdad, no discriminación y al absoluto respeto a las individualidades en el marco de una sociedad multicultural.

Parafraseando a Dworkin (1999), puede decirse que

“la igualdad real constituye el tipo estándar o directriz, esto es, el objetivo que ha de ser alcanzado; en tanto que aquella protección a los vulnerables fundamenta al principio que debe ser observado por exigencias de justicia o por cualquier otra dimensión de la moralidad”.

Entonces, la objetiva protección del vulnerable puede erigirse en un principio ordenador que aspire a lo óptimo y que dispuesto a ese fin se lo cumplimente en la mejor medida posible. De allí que la cuestión pasa por vislumbrar de qué manera se puede lograr ese objetivo, o cuáles son los mandatos jurídicos que funcionan sobre la base de esas premisas.

“La consciencia de la especificidad de la relación propiamente política de orden y obediencia se difumina con la progresiva descomposición del mundo antiguo; lo que en concreto se explica por la nueva extensión conferida a la noción de dominium, progresivamente aplicada de modo indiferente tanto al

poder sobre las personas como al poder sobre las cosas” (Aristóteles, 1988).

Hobbes (1987) mantiene en términos generales que la concepción recibida “no establece una distinción esencial entre propiedades de cosas y poder sobre los hombres (más exactamente, sobre las acciones), ni en el interior del poder sobre los hombres distingue, a diferencia de Aristóteles, entre poder doméstico y poder político” (p. 127).

Dicho de otra manera, no se aparta de la representación extensiva del dominium que, en Tomás de Aquino, recibía un fundamento teológico. Pero ese mantenimiento de la doctrina tradicional del dominium plantea problemas, pues Hobbes (2000) rechaza todo su basamento teológico y teológico-político, esto es, la representación de la creación como un orden jerarquizado de fines.

6. La Libertad como Derecho Humano desde el Derecho Privado

La libertad no consiste en sustraerse a una determinación, sino a actuar sobre ella, requerimos de los derechos para ello. En efecto, hemos alcanzado esta libertad (limitada) para dar significado a nuestra vida. Desgraciadamente, para la mayoría, hoy la significación dada es la que se impone: el “consumo”.

Ocuparse de la libertad y disertar sobre ella es función de los intelectuales que, a su vez, podrían olvidarse de las libertades. Habría una hipocresía algo velada al dejar de lado la responsabilidad social, que consiste en “liberar” efectivamente a los hombres y mujeres, que luchan permanentemente para salir de su miseria.

Acerca de la discusión de la libertad, Kant ve al Derecho Privado “bajo el principio del acuerdo de la libertad de unos con la libertad de otros” (Kant, 1922, p.10).

Las prescripciones de los derechos fundamentales no debían establecer criterios o fijar límites a las relaciones jurídicas de los ciudadanos concretos entre sí; no eran garantías de la libertad y la igualdad en todas las direcciones, ni

dirigidas o referidas hacia terceros, sino que eran garantías de libertad y la igualdad dirigidas o referidas al Estado.

En la Constitución española el artículo 32 obliga al Estado asegurar la igualdad del hombre y de la mujer en el Derecho matrimonial y de familia, que es una parte del Derecho Privado, pues los derechos fundamentales son la respuesta específica del Derecho Constitucional a la experiencia histórica de que el poder público tiende a lesionar la libertad de los ciudadanos.

La noción de libertad jurídica o externa, está vinculada con la necesidad de participar en el procedimiento legislativo al que uno mismo se somete, tal como Kant (1922), lo afirma en la definición de libertad jurídica hacia la paz perpetua, como la potestad de no obedecer ninguna ley externa más que aquellas a las que pueda dar mi consentimiento. Por lo tanto, en una doctrina del derecho, la libertad como único derecho innato o natural se define, en su versión afirmativa, como un derecho a no obedecer ninguna ley externa a la que no se pueda dar consentimiento, que puede reformularse como un derecho a colegislar la ley.

7. La Privación de Libertad y sus efectos en la vulnerabilidad de los privados de libertad

El Derecho Internacional en Derechos Humanos considera que la privación de la libertad por parte de un órgano del Estado es un momento sensible ante el cual las autoridades deben estar alerta. La experiencia a muestra que en los centros penitenciarios o centros de detención se alcanza el más alto riesgo de encontrarse ante prácticas de tortura, trato denigrante, golpizas e incluso la muerte de personas recluidas. Por ello, el proceso de privación de libertad cuenta con una serie de garantías y mecanismos de protección contemplados en los principales tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo es resguardar el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los presos o detenidos.

Los estándares de la Corte Interamericana de Justicia contemplan que el detenido o

privado de libertad se encuentra en las manos del Estado en una relación de sujeción especial, que lo sitúa en una condición de vulnerabilidad que obliga al Estado a brindarle protección hasta el punto de convertirse en su garante.

Los principios del estado de vulnerabilidad del privado de libertad y de la posición de garante del Estado desarrollados por el sistema internacional de los derechos humanos modificaron esta lógica, otorgándole una nueva dimensión a la noción de relación de sujeción especial (Durán Chávez & Henríquez Jiménez, 2021). Y no para conceder espacios de discrecionalidad y posibilidad de abusos a la administración, sino para incorporar un lenguaje de derechos del condenado, de límites y resguardos que deben desarrollarse para contener de forma razonable los riesgos que se materializan en la prisión.

Bajo esta nueva mirada, todo lo que ocurre dentro de una prisión es responsabilidad de las autoridades penitenciarias, que deben acostumbrarse a rendir cuentas y a explicar a la comunidad las decisiones que toman o los procedimientos que aplican, de forma de no dejar espacio a la negligencia, la omisión o la intención directa de causar daño a los privados de libertad (Bermúdez Santana, 2021).

Es de citarse el caso Acosta Calderón vs. Ecuador, con Sentencia del 24 de junio de 2005, en él, la Corte ha considerado que "los procedimientos de habeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática" (Corte Nacional de Justicia, 2005).

Estas garantías, cuyo fin es evitar la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones practicadas por el Estado, están además reforzadas por la condición de garante que corresponde a éste, con respecto a los derechos de los detenidos, en virtud de la cual, como ha señalado la Corte, el Estado tiene tanto la

responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido.

Actualmente puede encontrarse la ciencia de Psicología jurídica penitenciaria, esta área de la psicología se integra al enfoque organicista, sociológico y psicológico; la que se ocuparía de diferentes campos, como la teoría del delito, la personalidad de los delincuentes, las psicopatologías que estos padecen, la intervención y el tratamiento que se les aplica. Teniendo como objetivo principal las dos últimas, la intervención y tratamiento que modifica al interno.

Asimismo, es de interés para esta área de la psicología el contexto carcelario, especialmente lo referente al clima, a la suspensión o restricción de los derechos humanos más allá de la privación de libertad (Figuerola Arévalo & Suqui Romero, 2021). Para efectos de esta investigación, se consideró también el área de tratamiento psicológico vinculada a la rehabilitación de los imputados, la reeducación y la reinserción social que estos sujetos debiesen lograr para volver a insertarse en la sociedad.

Los exreclusos frecuentemente son estigmatizados por la sociedad quien los denigra y sitúa en un rango inferior. La estigmatización poscarcelaria consiste en el juicio social ejercido sobre el sujeto que tiene como antecedente haber estado privado de la libertad. El sujeto estigmatizado se concibe como poseedor de cualidades que de alguna manera la sociedad rechaza y no comparte, por ser contrarias a lo socialmente establecido (Andrés-Pueyo & Redondo, 2007).

No obstante, los efectos estigmatizadores de la sociedad que recaen sobre sujetos privados de libertad, declarados luego inocentes, prácticamente son los mismos que en el caso de los autores efectivos del delito. La sociedad los discrimina desde el comienzo del proceso penal.

La estigmatización tiene la característica de estar constantemente enjuiciando y, por tanto, remarcando al sujeto bajo el rótulo

de imputado. Dicha situación lleva a una tajante marginación y exclusión de dichos sujetos al momento de su reintegración a la sociedad. Cabe destacar la estigmatización ejercida por la propia familia y por el barrio en el cual el sujeto reside. Estas dos entidades también etiquetan al sujeto constantemente, lo que genera una cadena de sucesivas y arbitrarias discriminaciones y exclusiones (López Moya, 2021).

Por otra parte, según el Centro de Estudio de Seguridad Ciudadana CESC (2008), es la American Heart Association la que indica que la estigmatización social se puede correlacionar también con la salud del sujeto, tanto mental como física. Donde los estigmatizados están más proclives que la población no estigmatizada a presentar cuadros depresivos, enfermedades coronarias, hipertensión, entre otros.

Estos efectos de carácter social, discriminación, exclusión y aislamiento generan a su vez, un quiebre a nivel vital, una necesidad de posicionarse de una manera totalmente diferente, construyendo una coraza para poder proteger la identidad y la integridad, lo cual dificulta toda posibilidad de reintegrarse con normalidad y comodidad a la sociedad.

La estigmatización en la reinserción social laboral que cae sobre los sujetos involucrados se ve claramente reflejada al momento de retomar sus actividades y cuando se va a buscar y conseguir un nuevo trabajo. Lo que prima y determina su situación laboral es el antecedente penal, que genera una ineludible realidad de estigmatización y prejuicio social.

En la relación familiar en situaciones y contextos donde se ve cuestionada la identidad o los valores de algunos de los miembros del grupo familiar, y donde, por, sobre todo, no existe claridad ni verdad absoluta sobre un determinado hecho, los familiares pueden responder de distintas maneras, de acuerdo con el nivel de confianza que tengan respecto al familiar puesto en tela de juicio.

Las experiencias traumáticas y de alto impacto emocional repercutieron

fuertemente en la salud, ya sea física o mental, de los sujetos. El desgaste emocional, mental y físico fue significativo, dado el carácter brusco y repentino del proceso en el que se vieron envueltos. Tanto, durante el período de privación de libertad, como del proceso en su totalidad, se experimentaron niveles de estrés bastante nocivos para la salud. Sin duda, las alteraciones o enfermedades sufridas por los sujetos dependieron, en cada caso, del estado de salud previo, de la personalidad, del correspondiente tratamiento que pudieron obtener según su acceso a la salud.

8. La Vulnerabilidad de los privados de libertad

Los estándares internacionales sobre el trato de los reclusos refleja la centralidad de este asunto y su función como piedra angular en un esfuerzo duradero de la reforma penal, también refleja un compromiso genuino con la promoción de los derechos humanos y la dignidad humana, se destaca la necesidad de aumentar el profesionalismo de los involucrados en la justicia criminal, especialmente las personas que tratan directamente con los reclusos, y refleja un entendimiento de que el respeto por los derechos humanos es una característica esencial de un sistema penal que da mayor importancia a la reforma y la rehabilitación, que a la retribución y trato punitivo.

El derecho internacional establece que las autoridades responsables deben garantizar que todas las personas detenidas bajo su jurisdicción reciban un trato humano, es decir, con el respeto debido a su dignidad y valor como seres humanos.

Como objetivo velar por el respeto de la dignidad y la integridad física de las personas detenidas, asegurarse de que reciban el trato que establece el derecho internacional humanitario y otras normas y principios aplicables, y, cuando sea necesario, colaborar para que las autoridades detenedoras cumplan con sus obligaciones.

Las visitas regulares a los lugares de detención son un elemento clave, ya que

resultan fundamentales para comprender el funcionamiento de estos centros e identificar posibles deficiencias, lo cual está desarrollado y codificado en el derecho internacional humanitario, particularmente en los Convenios de Ginebra de 1929 y 1949, y en sus Protocolos adicionales de 1977.

Existen principios y disposiciones relativos a la protección de los derechos humanos, contenidos en instrumentos internacionales como en los siguientes por solo citar algunos ejemplos: Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Declaración Universal de Derechos Humanos; Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio).

Entre estos instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en las Américas se destacan la Corte IDH y la Convención Americana sobre Derechos. Asimismo, el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana.

El Estado como garante de este derecho le impone la prevención en aquellas situaciones como ahora en el sub judice que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida. En este sentido, si una persona fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente, muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, ya que en su condición de garante el Estado tiene tanto la

responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida.

El artículo 101, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que:

"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2.a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966)

Mientras que, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 25, dispone:

"Derecho de protección contra la detención arbitraria. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la

privación de su libertad" (Organización de los Estados Americanos OEA, 1948).

Dado que, el Derecho de hoy no es el Derecho de ayer, estamos obligados los operadores del Derecho a "revisitar la mirada" sobre los preceptos clásicos de nuestra disciplina, a la luz de los postulados emanados de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, con miras a tratar de proporcionar respuestas justas, equitativas y eficaces a las realidades socioeconómicas y culturales tan cambiantes de nuestros tiempos, en donde aflojan viejas y nuevas vulnerabilidades.

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto y analizado se concluye que:

- Los textos jurídicos modernos imponen un cambio de paradigmas de visceral trascendencia en la consideración jurídica de los temas involucrados, a su vez, si la dignidad humana pregonada ahora de manera expresa por el orden jurídico implica en gran parte reconocer en el individuo su aptitud para que pueda trazar y llevar a cabo su proyecto de vida, pudiendo optar libremente entre diversas posibilidades, la desventaja que causa la vulnerabilidad estará estrechamente unida a la desigualdad que ésta genera para la concreción de ese proyecto vital, por tanto, exige mayor atención.
- La vulnerabilidad va asociada a la idea, por la cual, el sujeto puede tomar o potenciar sus propias decisiones integrándose al entorno, ese concepto, por lo tanto, conduce a otro de enorme gravitación y que viene dado por la posibilidad de resiliencia, esto es, la aptitud para reponerse de la propia adversidad. Si se trata de empoderar a las personas quiere ello decir que la gestión va enfocada a fortalecer la

resiliencia. Luchar por los derechos humanos, es luchar porque nuestros congéneres sean más libres consigo mismos, sin auto represión, sin auto censura.

- El progreso del ser humano reside en esta capacidad de saber escoger la acción liberadora. Consecuente con esto, se considera necesario y urgente el surgimiento de instituciones específicas, las cuales acojan y brinden apoyo a sujetos que han estado privados de libertad siendo inocentes, ya que hay diferencias importantes en el tratamiento de sujetos inocentes que han estado privados de libertad, respecto al tratamiento y la reinserción de quienes han sido culpables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrés-Pueyo, A.; Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. *Papeles del Psicólogo*, 28, 157-173.
- Aristóteles, (1988). *Política*. Madrid Gredos S.A.
- Asamblea General de las Naciones Unidas (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Resolución 2200 A (XXI del 16 de diciembre de 1966).
- Barranco, M. y Churrua, C. (2014). *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Bermúdez Santana, D. M. (2021). "La privación de la libertad como último recurso en adolescentes infractores". *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 29-43. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.112>
- Bustos, J. (1996). *El Derecho Civil ante el reto de la nueva genética*. Madrid: Dykinson.
- Calvo, C. (2013), El principio "favor debitoris" frente al Proyecto de Código, en La Ley.
- Centro de Estudio de Seguridad Ciudadana. CESC (2008). *Debates penitenciarios*. https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/debates_penitenciarios_08.pdf
- Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH. (2012). Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Vs Perú, 2004, caso Durand y Ugarte, 2000, caso Furlán y Familiares Vs. Argentina. 2012, Caso Tibi Vs Ecuador, 2004, caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica, 2012, caso Balucio Vs Argentina, 2003.
- Corte Nacional de Justicia (24 de junio de 2005). *Caso Acosta Calderón vs. Ecuador Martín*. Ecuador.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. CSJNA (19 de septiembre de 1947). *Caso Martín y Cía. contra, Erazo, José S.* Ecuador.
- Durán Chávez, C. E., & Henríquez Jiménez, C. D. (2021). Principio de objetividad previsto en el código orgánico integral penal. Relación con el debido proceso. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 159-173. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.121>
- Dworkin, R. (1999). *Los derechos en serio*. Barcelona: Ariel.
- Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (20 de octubre de 2008) *Constitución de la República del Ecuador, Registro oficial 449*. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Ecuador. Decreto Ejecutivo. (27 de octubre de 2017). *Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades*. Quito: Registro Oficial Suplemento 109 de 27-oct.-2017. <https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-ley-organica-discapacidades>

- Espinoza Freire, E. E. (2020). La búsqueda de información científica en las bases de datos académicas. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(1), 31-35.
- Estupiñán, R. (2013), *La vulnerabilidad en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esbozo de una tipología*. Manual_v3, 193-232 https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/dhpp_pdf/DHPP_Manual_v3.193-232.pdf.
- Figueroa Arévalo, B. E., & Suqui Romero, G. Y. (2021). El principio de favorabilidad frente a nuevos procedimientos del Código Orgánico Integral Penal. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 240-255. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.133>
- Guzmán, H. (2005). El nuevo derecho civil y ética de los vulnerables. *1Library.Co*. <https://1library.co/document/eqorxnkq-nuevo-derecho-civil-etica-vulnerables.html>
- Hobbes, T., (1987). *Leviatán, o la materia, forma y poder de una sociedad civil y eclesiástica común* Londres: Andrew Crooke.
- Hobbes, T. (2000). *De Cive*. Madrid: Alianza editorial, S.A.
- Kant, I. (1922). *La Metafísica de las costumbres*. Rechtslehre: Ed. Leipzig.
- Levine, C. (2004). El concepto de vulnerabilidad en la investigación de desastres. *Journal of Traumatic Stress*, 17(5).
- López Moya, D. F. (2021). Las políticas públicas como garantía de los derechos fundamentales. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 44-60. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.113>
- Lyotard, J. (1979). *La condición posmoderna. Informe sobre el saber*. (s/e).
- Medina, G. (2017), *Acceso a justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Las 100 Reglas de Brasilia. En género, discapacidad y pobreza*. LL 14/11/2017.
- Ministerio de Salud Pública. (27 de septiembre de 2012). *Acuerdo Ministerial 1829*. Quito: Registro Oficial 798 de 27-sep-2012.
- Organización de los Estados Americanos OEA (1948). *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre*. (IX Conferencia Internacional Americana. Bogota. 1948). OEA.
- Pinto, M. (2004). *El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Scalabrini, R. (2009). *Cuatro verdades sobre nuestras crisis*. Buenos Aires: Lancelot.
- Schötz, G. (2013). *El favor debilis como principio general del Derecho Internacional Privado. Su particular aplicación a las relaciones de consumo transfronterizas*, *Ars Iuris Salmanticensis Estudios*, Vol. 1, 2013. https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128967/1/El_favor_debilis_como_principio_general_.pdf.
- Valente, L. (2015). *El nuevo derecho civil y ética de los vulnerables*. U.N.L.P. *Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales*. 1-20. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/50469/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y